

Transición, contextos y perfiles del cambio político mexicano

Otto Fernández Reyes*

La coyuntura electoral de julio pasado en México ha instaurado una profunda redefinición en los espacios tradicionales del orden político nacional. A partir esta consideración se requiere precisar que no es sólo el resultado de una alternancia en la presidencia, o un cuadro de nuevas formas en la representación de un Congreso más heterogéneo, o de una crisis en las formas habituales de la política y sus lógicas de control social. En definitiva, asistimos a una alteración sustantiva en los parámetros de la reproducción política en atención a los contextos y perfiles más estructurales de la lógica con que el sistema político mexicano ha venido operando desde sus crisis de los 80.

Curiosamente, por esta condición cíclica de sustantivas reformas parciales aplicadas “desde las alturas” a partir de los 70, un claro proceso de cambio político ha desembocado con un resultado —la transición política— que no culmina, pero tampoco desemboca en una crisis de proporciones incontroladas y sí, más bien, en las denominadas consecuencias “tersas” de una fractura interburguesa, como muchos afirman, sin que se especifique que se trata de una “alteración del orden dentro del orden”.¹

* Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Departamento de Sociología.

¹ Uno de los problemas más agudos de los estudios sobre la transición es la absoluta relativización con que conceptualizan el “tiempo de la transición”. Para los estudiosos, el “espacio del cambio” es no sólo sincrónico, sino alejado de la “larga duración” de los procesos que han gestado la dinámica definitoria del régimen político. La complejidad del cambio se reduce a aspectos formales o de procedimientos, desde donde se afirma que la transición es un hecho. Sin desvalorizar lo real de estos cambios, parece insuficiente quedar atrapado en esta consideración puntual. Sería más razonable evaluar las zonas de cambio y no cambio, por un lado, así como por otra parte, la tensión que originará este *impasse* entre estructuras políticas y sociales. Ello, por supuesto, parece difícil de alcanzar. Y es que, sin lugar dudas no sólo se confrontan dos esquemas analíticos liderados por racionalidades “politicistas” o “sociologicistas”. Más bien aparecen énfasis que desarticulan al sistema social reduciéndolo

De suerte que, ante la ininterrumpida estrategia de las élites políticas de “parchar el cambio” con soluciones *ad hoc*, transacciones continuas, pero indudablemente paralizadoras del ascenso de las oposiciones, se ha venido desarrollando un sinnúmero de procesos de rearticulación en los quiebres intrasistémicos, desencadenando un desenlace que no deja de estar enclavado en esa “rutina” típica identificable en la larga duración reformista-antirreformista del sistema político mexicano: modernizar para preservar; cambio para continuar. Misma rutina, capaz, efectivamente, de producir el cambio para crear condiciones de alternancia PRI → PAN o de parlamentarismos bipartidistas coyunturales y cambiantes PRI-PAN, PAN-PRD o PRI-PRD. Por supuesto, los acontecimientos no son reducibles a estas únicas o posibles circunstancias; pero tampoco se alejan de una continuidad sistémica de carácter conservador que atenta y limita los alcances y profundidad de la liberalización y eventual democratización en la sociedad mexicana. De ello da cuenta, por supuesto, la impresionante aceleración con que las dirigencias empresariales, así como las jerarquías católicas, reubicaron su discurso y actuación frente al Estado después del 2 de julio. Incrementaron exigencias; desplegaron “cobros” por lealtades o “respaldos” implícitos o explícitos. En resumen: condicionando la posible orientación del nuevo gobierno, al proyectarse como los “depositarios estratégicos” de la futura consolidación democrática; o gritar el “derecho de las derechas” a conducir y organizar la democratización del país desde las lógicas empresariales neoliberales o la moral integrista del catolicismo ultraconservador.

Pero lo anterior podría ser una tipificación parcializada que sesga y no mueve a las conciencias a reflexionar sobre las condiciones con que la transición (T) se desarrolla hoy en México. Por ello debemos ver en la “sucesión presidencial” más que un relevo del autoritarismo con liberalización del aparato político tal cual. Antes bien, aquélla refleja cómo los ámbitos

a sistema político. Deambulando entre un determinismo economicista –neoliberal o marxista ortodoxo– hasta pasar al determinismo politicista liberal, pluralista, e insensible a estos “ritmos del cambio” más prolongados. Quizás antes de calificar la culminación de los procesos habría que englobar la valoración de las relaciones distintivas con que el sistema –como un todo– se define: pasa por reformas o contrarreformas, se estanca en el propio espacio de una transición trabada o paralizada, desata vacíos o equilibrios catastrofistas que paralizan el cambio o lo reconducen a “consecuencias no pensadas de la acción”, como apuntaría Weber. El ejercicio de caracterizar dichas transformaciones ahorraría dolores de cabeza y precipitadas emociones proyectadas a “des-tiempo” si se tuviera la cordura de evaluar con mayor detalle estos procesos.

del intercambio político, obstruidos por un extenso proceso de bloqueos múltiples entre los grupos dominantes y la clase política, y de las últimas contra sectores de la sociedad progresivamente movilizados y despolitizados a la vez –en la extensa faena de crisis y contra-crisis que transcurre en las coyunturas de 1982, 1988, 1994-95, 1997 y 2000– sucumben respecto de las habituales estrategias de funcionamiento del orden político, como veremos más adelante, lo que acelera la necesidad de nuevos instrumentos de conducción y diseños de acuerdos entre las elites y la sociedad.

Frente a esto, estamos obligados a representar, aunque sea fugazmente, los ritmos y grados en la conjugación de la crisis del sistema político tradicional (autoritario y corporativo) y la emergencia electoral y política de una liberalización que se mantiene, aun hoy, inconclusa, por las obvias razones de su desarrollo desigual y combinado, rasgando las superficies y zonas determinantes del sistema (como la Presidencia de la República), reubicando las contradicciones (del corporativismo y del autoritarismo) hacia nuevos espacios de conflicto (en el Congreso); pero también, obviamente, dejando abiertos a los actores los nuevos papeles que con distintas ideologías (de franca derechización y conservadurismo) en unos se hacen presentes no sólo en la vida política, sino en lo social ampliado; y en otros, bajo las antiguas y recientes formas de percepción y representación de intereses (en las mezclas de populismo con neoliberalismo).

En definitiva asistimos a: 1) una caótica conjugación de discursos ideológicos fragmentados; 2) contradictorias prácticas políticas que celebran las libertades democráticas para aplicar y concebir programas de derecha individualizantes, anti-públicos y acotadores de lo social; y 3) pasar por una transición que amplía la liberalización política con conservadurismo de masas y estrategias de modernización económica pro-empresariales.

¿Es esta la transición con que hoy se transforma el horizonte institucional de las casi últimas seis décadas y media en México?

Parámetros de la crisis del orden político

A fin de intentar responder lo anterior, y sin desmedro de una discusión más puntual, se puede colocar –como punto de arranque– que para inicios de los años 80 la crisis del “antiguo régimen” de la pos-revolu-

ción ha significado un cambio en los mecanismos de aquiescencia política en México. Se aprecia que un conjunto de contradictorias sobreposiciones se teje no sólo en la corta duración, sino sobre todo, en la culminación de un modo de “hacer la política” y de “concebir la política”. Varios son los episodios que transcriben, no sin cierta continuidad, la creciente incapacidad para preservar el orden político dentro del sistema. Veamos.

En 1987-1988, el PRI sufrió, por vez primera, un ataque frontal de las fuerzas neopopulistas, desde las versiones obreristas y agraristas del cardenismo, desgajadas de su estructura formal. Ello supone un reto que culmina con la decisión de fuerzas de izquierda marxista y fracciones de las élites desarrollistas expriístas de “prolongar” las formas del Estado social-corporativo-popular frente al ascenso de núcleos dirigentes con un propósito anti-reformista y proto-capitalista firme y decidido, bajo la conducción de fracciones tecnocráticas en conformación progresiva.

Lo que esto augura es una profunda crisis en el aparato político tradicional; se aprecia un quiebre a “tres bandas” en la antigua élite en el poder: desde sus sectores autoritario-burocráticos, el emergente conglomerado de la tecnocracia en ascenso y la excluida facción neopopulista reformista. Así, la diferenciación intraelitista avanza como nunca antes; se hace pública. Se muestra con un desacato preliminar tibio y emergente para, a fin del siglo, operar como conjunto de facciones abiertas y con autonomía ante los poderes habituales del Estado. Con ello las desavenencias en la “familia postrevolucionaria”, que antes se tuvo a bien resguardar vía un presidencialismo absolutista, emergerán proyectando toda una línea de flotación debilitada y resquebrajada; evidenciando públicamente la inexistencia de uniformidad y unidad de mando como antaño.

Esta situación confirma e instaaura la más decisiva división intra-élites de la postrevolución en la clase política; ya que introduce, en una coyuntura de fracturas previas frente a los sectores burgueses —a partir de la nacionalización de la banca en 1982— un escenario de fragilidad ante el gran capital y, además, una necesidad de perseguir sus apoyos para afrontar el ascenso de masas con que la izquierda y los sectores neopopulistas se disponen a introducir su convocatoria alternativa en un contexto de creciente antipatía hacia el Estado social-corporativista, venido a menos por la crisis. Semejante situación marcará la activación política a lo largo de más de una década y media, imponiendo un confuso panorama de “enfrentamientos” entre partidarios del “Estado ineficiente” (social) y

Cuadro 1. Dinámica del sistema político en la época de la institucionalización

Características	Escenario 1: 1930-1950	Escenario 2: 1950-1960	Escenario 3: 1970-1980
Niveles	Pop Aut Corp	Pop Aut Corp	Pop Aut Corp
Mayor	+ +	+ +	+
Menor	-	-	- -
Forma política	Consenso en la dominación por un compromiso de clase múltiple	Alianzas coyunturales	Ruptura de alianzas por autonomía de las burocracias
Desenlaces	Hegemonía estatal nacional-popular	Hegemonía burocrático-corporativa	Dominación burocrática sin consenso (Burgués-Popular)

Nota: **(Pop)** Populismo **(Aut)** Autoritarismo **(Corp)** Corporativismo

“modernizadores” del sector público (privatizadores). Así, de repente, defender al Estado convierte a los actores respectivos en burócratas estatistas ineficientes, y respaldar la modernización privatizadora transforma a sus seguidores en gestores del progreso y del cambio institucional. Los vocablos del debate socioeconómico que enfrentaba el desarrollo o atraso pierden así su significado profundo y no se vislumbra, en detalle, el porqué ni los cómo salir del problema. Por el contrario, las consignas convierten al mercado en el “hacedor” y la “clave” con la cual trastocar los obstáculos del manejo corporativista de la política y la economía.

Con la segunda coyuntura de importancia, durante 1994-95 y que, realmente, no comienza con la insurrección zapatista y sí con el rechazo de la sociedad a la estrategia insurreccional agrarista-indigenista-populista del EZLN –combinada con una restauración de respaldos de masas y de clases medias urbanas a las candidaturas del PRI en las elecciones nacionales– reaparece un foco de profundas contradicciones en el horizonte político. En qué consiste esta paradoja: primeramente en la aparición de un activo social que se opone a la posibilidad de una represión estatal al zapatismo en el sur, pero alternativamente y en segundo lugar, coincide con

un enorme respaldo electoral al *statu quo* tecnocrático-priísta hacia un segundo periodo sexenal hacia 1994-1999.

Aun y cuando esta paradoja muestra una clara dubitación política, y una remisión al tercer lugar del neocardenismo –en tanto que fuerza electoral progresista– el hecho incontrovertible es que grandes segmentos de la sociedad apuestan por la modernización cifrada en la promesa movilizadora del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de una política neoliberal menos agresiva en un contexto de insurrección y crisis financiera mundial. De esa manera se refuerza una perspectiva sobre cambios controlados y sin sobresaltos, pero sobre todo, redefinidores de la desestatización y privatización extremas anteriormente replicadas por el salinismo.

Sin embargo, esto no parecería ser el comportamiento con que el grupo tecnocrático tomará cartas frente al problema de la modernización neoliberal, en cuanto a su profundización y respecto de las amenazas de quiebres por la vía de insurrecciones acotadas iniciadas en Chiapas y proseguidas después en Guerrero. Su respuesta, en lo fundamental, fue pragmática y se centró en desmovilizar la insurrección por la vía de bloquear la interlocución con otros sectores de la sociedad y no desde la perspectiva de acoso y guerra de aniquilamiento tradicional.

A ello ayudaría la desubicación y parálisis política del neocardenismo ante el levantamiento zapatista. Y es que ante su empantanamiento, y frente a un actor que levantaba en forma radical las consignas del agrarismo clásico nacional, el sistema político reaccionó con rapidez. Se desarrolló una iniciativa por el lado del salinismo-camachismo de conceder al parámetro insurreccional agrarista una actitud de franca “tolerancia político-militar”; donde el Estado mexicano, sabedor de lo que suponía afrontar un posible “68 agrario-indigenista” decidió en favor de la negociación, lo cual en otras circunstancias, hubiera sido imposible de aceptar en las alturas del poder, se instrumentó para sorpresa de unos y otros, con todas las mediaciones y choques imaginables al seno de la clase política. Y sin que ello supusiera que el sistema abdicaba de ejercer la represión y la persecución a sus adversarios, la insurrección organizada a lo largo de casi una década “culminó” en negociaciones formales en una mesa de diálogo con el Estado mexicano. Lo estratégico e inobjetable fue que la evaluación de “negociar la insurrección”, dentro de las líneas de argumentación políticas del “Estado de derecho”, condujeron la acción zapatista –en el corto plazo, por supuesto– bajo el fárrago de una

transición no a la democracia y sí hacia un neoliberalismo salvaje inimaginable que, ciertamente, condicionó el horizonte ideológico-cultural de los actores en la coyuntura que se abría con impresionante conflictualidad potencial y real en México, pronunciando salidas extremas por el lado de una política económica cada vez más excluyente, y opciones de institucionalizar al sistema de partidos como fórmula contrastante a la amenaza reformista o insurreccional. Obviamente, frente a la segunda posibilidad –la de una autonomía progresiva en el sistema de representación partidario– las fuerzas de oposición al régimen por la derecha en el PAN y la centroizquierda en el PRD, quedaron divididas y tomaron decisiones cada vez más intrasistémicas en el combate a la estrategia económica y política.

Desde ese corolario, las simpatías iniciales hacia la revuelta se desdibujaron. Se aceptó el rechazo a la pobreza lacerante de las sociedades rurales y, en especial, indígenas, pero hasta allí llegó el punto. Lo suficiente como para que las élites tecnocráticas no vieran a través del evento electoral de 1994 su Waterloo: cual síntesis culminante de las luchas desencadenadas en 1988 que habrían, posiblemente, de concluir en un colapsamiento electoral y en el rechazo masivo del modelo neoliberal. Al parecer lo que se tejó fue una historia muy distinta. Aquélla que pudo “soportar” acontecimientos como la propia insurrección, los asesinatos políticos intraélites, la masiva concurrencia de votos favorables al PRI, la crisis financiera en diciembre de 1994 y la ampliación de los parámetros de pobreza y desigualdad más significativos de toda la historia posrevolucionaria, complementados con una activación insurreccional –del EPR, ERPI y otros más– en varios puntos del territorio nacional. Sin que, al parecer, se incrementara el radicalismo político y sí, por el contrario, una postura más intrasistémica: acotada, evolucionista o reformista, sobre las transformaciones políticas y el acceso a la democratización del régimen en niveles orientados a legitimar la competencia entre-élites. Es decir: el ingreso a un ciclo político conservador todavía no permitía a los actores reconocer los límites de sus acciones y los alcances que las acompañaban.

Lo anterior hablaría de una situación objetiva y subjetiva curiosa: en los instantes de mayor descalabro político-sistémico, los grupos subalternos se mostraban cautos, conservadores y sin grandes deseos de cambios radicales o extensos en las oportunidades del ejercicio político-electoral (véase

cuadro 2).² Lo que más se apreciaba sería un progresivo avance del PAN en la zona del norte del país, así como la forja de un evidente tacticismo de naturaleza “burgués-bipartidista” explícito con el PRI, en aras de alienar a la izquierda y sectores progresistas de signo populista, partidarios del estatismo social o del intervencionismo público contra la economía neoliberal. De esa manera, solo cuando el PRD arrasó electoralmente en 1997, situando al ciclo de profundización neoliberal en una “crisis de expansión”, el PAN “jugará” como partido menchevique en “alianzas múltiples” con el PRD y el PRI, alternativamente; con lo que canalizará protestas y acuerdos frente al PRI, pero también, alcanzará a limitar el radicalismo

Cuadro 2. Dinámica del sistema político en la época del neoliberalismo

Características	Escenario 1: 1980			Escenario 2: 1980-1990			Escenario 3: 1990		
	Lib. Polit.	Desest.	Priv.	Lib. Polit.	Desest.	Priv.	Lib. Polit.	Desest.	Priv.
Mayor	+	+			+	+	+	+	+
Menor			--	--					
Forma Política	Espontaneísmo anti-estataista subalterno y de capas medias			Creciente respaldo de masas a la privatización Social-Estatal			Modelo Bipartidista de derecha		
Desenlaces	Crisis de la hegemonía estatal-social			Hegemonía privatizante del Estado			Fractura capas tecnocráticas y burocráticas y ascenso de un modelo de alternancia conservado		

Lib Polit.: Liberalización Política; **Desest.:** Desestatización; **Priv.:** Privatización

² Si se observa el cuadro 2, en particular los escenarios 2 y 3, se aprecia que el régimen salinista está por entrar en una fase en que, para intensificar y profundizar la desestatización y la privatización de la política económica y social, accederá a una liberalización política mayor. Esto se contemplará una vez, como manifestaba el propio Salinas, en que las políticas económicas sean irreversibles y permitan condicionar los alcances de la democratización a los límites de la reestructuración del sistema de partidos y sus mecanismos de representación vía los procesos electorales. Lo anterior se comprende a cabalidad. Salinas y los sectores tecnocráticos no asumían, en estos tiempos, que se comprometerían en una modernización que suponían central, como sería el TLC, para perder elecciones o ser desbancados al final del sexenio. Su concepción de liberalización política no era la de ampliar la democracia para perder el poder a partir de una política económica tan drástica y global, situación que se modificará en el régimen zedillista como resultado de una política económica mucho más restrictiva en lo social, pero igualmente progresiva en lo pro-empresarial.

del PRD en materia de políticas antiburguesas, del estilo FOBAPROA; y, finalmente, con las propuestas pertinentes para salvaguardar el orden económico neoliberal.³

De esa manera, parecería que se producían procesos de “alineación políticos” a consecuencia de la superposición de luchas, enfrentamientos y fracturas entre partidos y fracciones; emergencia de liderazgos no democráticos, pero atractivos vía medios de comunicación, dentro de una coyuntura de liberalización política, así como de, por otra parte, crecientes actitudes conservadoras en amplios estratos de las clases medias y populares del país. Los partidos sostenían enfrentamientos que pervertían sus horizontes y posiciones políticas al cambiar de posturas, aceptar coincidencias pragmáticas o distanciamientos que de un día para otro conducían a nuevos acuerdos o desacuerdos sobre los tomados en la sesión precedente en el Congreso o en las reuniones interpartidarias de diverso tipo. El horizonte político daba la sensación de fragilidad, oportunismo o aparente liberalización sin orientación alguna de los actores políticos principales. Y todo esto conducía a generar una sensación de que nos dirigíamos a nuevas formas de la política; novedosa por su oportunismo rampante, ausencia aparente de ideologías dentro de robustecidas culturas políticas tradicionales en las élites del PAN y del PRI tecnocráticas. En definitiva, parecía ser el complemento perfecto para frustrar la radicalización política y extender los posicionamientos conservadores en la transición.

Aun cuando, para la coyuntura del 2000, una fractura en el seno del PRI estremecerá al partido, y a pesar de la crisis de representación entre sus tres fracciones políticas —tecnócrata, autoritarista y reformista— la “transición a la derecha” estará asegurada. El orden político neoliberal, desde su componente de hegemonía tecnocrática priísta, centrará como eje de su redefinición ante la sucesión presidencial la permanencia del modelo económico neoliberal antes que la del sistema presidencialista.

³ El capítulo FOBAPROA deberá ser analizado como la culminación de una hegemonía financiera que también sufrió el impacto de esta división en la clase política y el desencadenamiento de efectos sociales que hicieron del sector bancario beneficiario de la hegemonía tecnocrática y usufructuario de la redefinición del sistema político desde las instancias económicas de la gran burguesía financiero-especulativa. Este craso error sólo pudo presentarse por la impericia de sobreestimar o basarse en el economicismo rampante que empezó a desarrollarse desde 1998, dominando el país hasta el presente, y que pretende, sólo que desde la derecha ideológica, acceder a comprender lo político vía lo económico. Algo que el nuevo gobierno parece compartir plenamente.

Las razones eran varias: el PRI adelantaba con la constatación de su crisis interna la del régimen, precipitando la incapacidad del presidencialismo para continuar ejerciendo las funciones de centralización y hegemonía tradicionales en el sistema político. Ello introducirá un cambio en el eje de valoración y jerarquía en el seno de las clases dominantes: autonomía estatista o hegemonía burguesa. De hecho, la opción tecnocrática de la clase política priísta optará por lo segundo, a sabiendas de que esto le permitirá trascender la coyuntura y posicionarse sin una pérdida sustantiva de respaldos ante el gran capital, obligando de esta manera a las facciones burguesas panistas a rescatar acuerdos con dicha estrategia, que convertía al PAN en defensor de la permanencia del PRI a fin de preservar la estabilidad y el orden en una futura alternancia.

Ahora bien, los eventos cifrados alrededor de varias coyunturas –en 1988, 1994, 1997 y 2000– sólo confirman que el antiguo y obsoleto “orden normativo” del sistema político mexicano habría colapsado. Y que, incluso, en su modalidad neoliberal se hacían necesarias “reparaciones” políticas de cierta envergadura ante la recurrente reiteración de las crisis, sobre todo en plazos cada vez más acotados y extensos en las repercusiones que las dinamizaban.

Cuando hablamos de que la estructura del orden normativo del sistema político habría entrado a una fase de crisis de reproducción, lo que queremos destacar es lo siguiente: tradicionalmente, el sistema político operó a partir de tres ejes de convocatoria de masas y de clases: a) el populismo, b) el autoritarismo y c) el corporativismo. Pero llegado el instante de su crisis más definitiva, donde la imposibilidad de consolidar una integración social respecto del Estado parecía evidente, resultó “natural” que lo político comenzara a resentir en exceso las estrategias de despoltizar a la política misma.

Ello se hizo evidente ante la disminución de las mediaciones corporativas y populistas, cual mecanismos de reproducción sin legitimidad de masas, que comenzaron a ser sustituidas por el exclusivo procedimiento de la cooptación autoritaria y de lealtades centradas principalmente en los aparatos y no en sectores subalternos. Pero esto, canalizado por las propias estrategias neoliberales, también sería limitado en su perdurabilidad sistémica. Fue útil para desbancar el populismo, pero no para consolidar, en lo político-social, al neoliberalismo. Por lo tanto, la crisis política de la liberalización parcial retenía las contradicciones de un orden marcado por una inestabilidad que no sería superada con la mera sustitución de “un” actor.

Los discursos tecnocráticos, amparados en enunciados de eficiencia, pragmatismo y racionalidad —excesivamente economicistas, por demás— no lograron sustituir del “imaginario actual” las convocatorias distribucionistas y corporativas del entorno originado en las estrategias nacionales populares de antaño; de tal suerte que la crisis del esquema neoliberal no vino a ser consecuencia de su ineficacia y sí de su éxito. Por supuesto, “medido” en sus términos de acumulación corrosiva y empobrecimiento global, la modernización capitalista impulsada durante el salinismo y prolongada en el sexenio posterior cumplió con las metas de instaurar una dominación burguesa en los ejes del Estado mexicano en las últimas dos décadas. La condición de privatización generalizada de lo económico, pero también de lo político propiamente dicho: “un voto, un ciudadano”, acrecentó la lógica de ampliar la base del modelo de control y reproducción neoliberal sin tomar en consideración quién debería ser su “élite” correspondiente.

Pero a pesar de ese “éxito”, el neoliberalismo, postulando una “racionalidad superior” a las ineficacias nacional-populistas, resultó incapaz de trascender la escalada propia de un orden “sin normas de integración” y “sin capacidad de adaptación” en el mediano plazo. La “crisis” que se reconstituía, que no era ya la de zonas de corporativismos mermeros o de desarrollismos acotados, sino la de las francas imposibilidades de integración sistémica de sectores subalternos desarticulados del Estado y las políticas públicas, representaba un enorme problema de gobernabilidad en ciernes. De hecho, en la medida que los “bloqueos” para integrarse y adaptarse al orden eran la nota característica de un sistema político concebido para reclutar sectorialmente a núcleos de las altas clases medias, el sistema parecía regodearse en la exclusión masiva de sectores subalternos. El crecimiento de la pobreza y de la migración laboral internacional confirmarían la materialización del controvertido episodio de un cambio social en la naturaleza del Estado sin una preocupación por incluir apoyos sociales respectivos en relación con los núcleos populares, base y soporte anterior del régimen (Boltvinik, 1996; Calva, 1994; CEPAL, 1997).

No sería pues casual que el presidencialismo, el autoritarismo y el corporativismo burocrático entraran, paralelamente, en escenarios diferenciales de resquebrajamiento institucionales y sociales. Era lo más natural ante la envergadura con que los acentos neoliberales se manifestaban; intensificando las contradicciones en las inoperancias burocráticas tradicionales,

pero desarrollando, a su vez, las propias de la tecnocracia en ascenso. Doble contradicción y, por supuesto, división de la clase en el poder.

Pero además, era este avance en las estrategias individualizantes, sustitutas de los compromisos de clase corporativos, el responsable de cobijar una contradicción en los propios términos de desmovilizar y despolitizar para posteriormente perseguir activaciones parciales y acotadas de respaldo político a las estrategias de privatización global. Las fuentes de inestabilidad que se encontraban así plantadas no lograban estallar en la medida que una parálisis en sus adversarios le otorgaba mayor eficacia que las que definía a las políticas, quedando los opositores sólo con el reclamo de censura a los esquemas de desigualdad con que la modernización y reformas capitalistas conservadoras se enlazaban coyunturalmente en México, así como con una demanda de democratización a secas que no discutía sobre los contenidos del cambio y de las reformas. Como consecuencia de ello, el triunfo de Cárdenas en 1997, en lugar de ser el “freno de masas” al neoliberalismo, se convirtió en la catastrófica confirmación de que el neopopulismo y la izquierda socialdemócrata carecían de un discurso propio para instaurar un polo de poder popular alternativo. Su reflexión, en ese sentido, era marcadamente simplista: asumían que el Estado y sus actores institucionales, PRI, PAN y medios de comunicación, “respetarían” la “voluntad popular” de un gobierno de oposición en la capital de la república sin bloquearlo, denostarlo y organizar la insurrección “salarial” de bomberos, burócratas, policías y quien fuera. Así, los plantones y movilizaciones continuas sólo perseguían introducir la articulación entre inseguridad ciudadana por la delincuencia e ingobernabilidad de la oposición en el DF. De esa forma era factible dar a entender la incapacidad del PRD para enfrentar los retos del país.

Sin embargo, aunque se logre comprender que la crisis desatada por el ascenso neoliberal en los territorios por la incapacidad de integración sistémica, adaptación mayoritaria al orden y bloqueos de objetivos y de medios para alcanzar opciones distintas en lo político hayan desarrollado una “disolución” de las normas de articulación entre actores y estructuras políticas, el saldo neoliberal no salía bien librado tampoco en esta coyuntura. Se produjeron “vacíos identitarios” que repercutieron en las capacidades de comunalidad política entre los sectores subalternos. Efectos que han tenido como consecuencia la “incomunicación” entre los sujetos de la acción política, pero al mismo tiempo, originaron una me-

diación excepcional de los aparatos partidarios y de los medios de comunicación que, en resumidas cuentas, resumieron las funciones del Estado y de la sociedad civil de forma extraordinariamente acotada hacia esferas no comprometedoras del orden social, sustituyendo así a los actores por los partidos; a las clases por liderazgos a-ideológicos, “Amigos de Fox” es la confirmación del punto en forma extrema, y en definitiva, introduciendo una “agenda de solución” del (des)orden político dentro de las premisas y parámetros de la T controlada.

Contra-reformas con violencia; liberalización sin reformas

No por casualidad Huntington (1972) había afirmado que “en la mayoría de las sociedades la paz social es imposible sin alguna reforma, y ésta imposible sin cierta violencia”. Toda la razón le asistía; la violencia “desde arriba” había producido a partir de 1988 en México una “contrarrevolución neoliberal exitosa” a fin de redefinir el escenario de institucionalización en la dinámica política originada en los años veintes.

El saldo preliminar era que un cambio político, es decir una reforma, era impensable sin el PRI en el pasado reciente, y que toda ilusión de alcanzarla —en las actuales premisas de redefinición del Estado— tendría a sujetarse a las condiciones de privatización, desestatización y progresiva cultura conservadora reinante en el escenario de la interacción política de los últimos dos sexenios. Para ello se necesitaría de una estrategia compleja y difícil, y qué mejor que la que “dosificara” los alcances de la liberalización en marcha: insistiendo y recalando sobre los “procedimientos electorales”, los “mecanismos de representación” (en el Estado de derecho, léase: la reforma del poder sin quebrar al poder en sus aristas de progresivo aburguesamiento en el Estado) y las “reglas de conducción” de la política económica en los posibles “relevos inter-elitistas” de la reproducción neoliberal; y esos supuestos se enmarcaban en liberalizar sin reformar en términos sociales, patentizando la profundización capitalista en desmedro de lo público.

El saldo, por lo tanto, para ejercer una conducción sobre los parámetros inestables de las reformas o alternancias en el sistema político, éstas deberían garantizar que, en igualdad formal, la democratización sería acotada y la privatización intocada por las nuevas élites que accedieran al gobierno. En su momento, lo anterior fue resumido con exagerado realismo por O’Donnell y Schmitter (1988) cuando señalaron que “durante

la transición los derechos de propiedad de la burguesía deben mantenerse inviolables”.

Esto no fue apreciado, en la prolongada y abtrusa T mexicana, por las fuerzas de oposición; leyeron las crisis, endógenas y externas del Estado y de las fracciones burguesas, como una ratificación irreversible de un ciclo terminal de régimen en descomposición, y no se percataron que, aunque ello era parcialmente cierto, el sistema se había debilitado en lo político (presidencialismo y corporativismos autoritarios), mas no en la agenda de consolidación neoliberal (privatizante y pequeñoburguesa excluyente).

Es decir, la estrategia neoliberal se dirigía a las capas medias como sector social de probable respaldo. Las “masas pacíficas” se buscaban y encontraban allí; donde podía ser más productiva la conducción egocéntrica del privatismo burgués y del individualismo político exacerbado en esa imagen mil veces proyectada en la televisión de un actor que reclama su libertad de circulación ante una marcha que a su juicio obstruye el (“su”) tránsito, aunque la reconozca como legítima al reclamar mejor salario y condiciones que abatan la desigualdad de sus participantes. Así, los actores son “balcanizados” en su subjetividad y llevados por la nueva ideología de la “tolerancia democrática” a ser intolerantes y autoritarios. Paradoja de la liberalización: liberarse individualmente —frente al Estado, pero no ante el mercado— para ratificar sus exigencias particularistas de ciudadanos que sólo observan sus derechos en el contexto de un cambio que no los perturbe o afecte.

El sistema político vivía una crisis, la vive aún, es cierto, pero mostraba respuestas ágiles para reintroducir su mecánica de reproducción sistémica no sólo desde sus impulsos internos, sino además, basándose en los respaldos externos. Y es que, paradójicamente, la globalización prodigaba de golpe una ruptura dramática a las bases de sustentación del esquema corporativista-autoritarista. La “nueva modernización capitalista” exigía desde fuera del sistema político una reorganización del “pacto” entre la burguesía-Estado (y sociedad). Y esta responsabilidad, en el nuevo ciclo de modernización en marcha, demandaba otras reglas de operación y de conducción más estables en la lucha y arreglos institucionales. La liberalización venía atada a la privatización neoliberal como su contraparte inexcusable, y no a la política social. Los cambios en los planos organizacionales en el nivel del Estado fueron avalados a fin de desamarrar la estructura de compromisos clasistas de la clase po-

lítica vía la política social y las concepciones fundacionales del aparato público mismo.

Quizá por esto se comprenda que el “nuevo orden” vivirá la crisis no como anomalía, sino como la premisa imperiosa de atravesar desde la descomposición del antiguo régimen una reforma que sacrificara a fracciones burguesas y autoritarias, mas no al sistema de dominación. Y ésta es la pequeña diferencia para comprender en la actualidad la capacidad de convocatoria al “cambio político” PRI, PAN como alternativas en el espectro de la conservadurización en que discurre la T mexicana.

Escenarios del sistema político: división de las élites y exasperación social

Sin embargo, la T se ha venido desarrollando en dos ámbitos estructurales sociopolíticos y económicos característicos: en primer lugar, en medio de una división múltiple de la élite política y, paralelamente, ante un proceso de fragmentación social a consecuencia de la ruptura del tradicional pacto de dominación corporativista y, alternativamente, por la irrupción de la lógica de modernización neoliberal.

De lo primero hemos establecido algunas consideraciones básicas que precisan cuestiones adicionales en la argumentación sobre los escenarios de operación del cambio político.

En este sentido, la división y contradicción prolongada entre Estado-sociedad, a fines de los 60 y 70, acarrea en México, en distintos niveles, problemas obvios de gobernabilidad y un quiebre acentuado en los consensos más generales de la institucionalidad estatal con la subsecuente crisis de legitimidad a inicios de los 80. Pero recordemos, que los Estados capitalistas han aprendido a sortear, de múltiples formas, estos déficits de respaldo de masas y falta de congruencia entre prácticas políticas y normatividad constitutiva en las normas de operación institucionales (Habermas, 1975).

Frente a esto, la división estructural y visible en la clase gobernante, entre capas burocráticas y tecnocráticas, a consecuencia de una incapacidad de las primeras para afrontar la ingobernabilidad asentada por la ruptura del modelo de industrialización, la petrolización de la economía y la crisis de la deuda externa, lanzó a las segundas a disputar la conducción más instrumental y burguesa del Estado, promoviendo una ruptura en los compromisos sociales con los sectores subalternos.

Para ello la tecnocracia necesitó de un buen pretexto: ¿Quién era el responsable de la debacle por la que atravesaba el país en esos años?

La respuesta fue incontrovertible: el populismo y sus secuelas agraristas, desarrollistas, intervencionistas corporativistas, de cooptación subalterna de clases y de autonomización de las burocracias frente al capital privado. La convocatoria se orientaba al enfrentamiento y acotamiento de estas “conductas irracionales”, que habían conducido a la ineficacia, el despilfarro y a una cultura social de la gratuidad de los servicios y subsidios públicos a cambio de un fácil respaldo de masas irresponsables.

El discurso tecnocrático se pronunciaba así por un régimen de expertos en la cosa pública; por un desenvolvimiento profesionalizante que disimulará sus compromisos preconcebidos en alianzas de clara orientación burguesa; en el fondo, se advertía un propósito que se desplazaba en el obsesivo contexto de la privatización y desestatización del Estado. Se tejía todo un programa de sensibilidad y valoración extensa, en que la privatización era no sólo una salida al estatismo, sino la más racional entre todas las opciones para trascender el atraso del reformismo y el desarrollismo burocrático-estatal.⁴

Se precisó que, para culminar este esfuerzo y movilización anti-estatal, se requería una transformación que tuviese como eje la activación de la ciudadanía política en el activismo de electores individuales. La política se proyectó con el engranaje de una acción de sujetos individuales: donde un ciudadano era equivalente a un voto; “decidido” en “plena” conciencia y sin ser suplantado por el Estado. La democratización del país, en sus dos orientaciones de privatización económica y democracia de élites, sería el resultado de esta conciencia de los votantes individuales y no de grupos, corporaciones, clases u organizaciones sectoriales. El espíritu de la ley descansaría en la decisión de cada actor participante y no

⁴ La discusión sobre las “ventajas” de la privatización realmente no se dió en México desde una perspectiva seria y formal. Muy por el contrario, con la “demostración” de la “corrupción pública” fue más que suficiente fundar la sensibilidad en favor del cambio de lo público a lo privado; y en ello desempeñó un papel primordial en el que la ofensiva conservadora penetró con un importante respaldo cultural e intelectual de importantes núcleos de intelectuales que también recorrían su propia mutación social en *Vuelta* y *Nexos*. Salinas (1990) demandaría, ante las circunstancias de la globalización que: “La reforma del Estado no es una propuesta aislada. Es consecuencia de una nueva situación internacional y de una línea política que asume ciertos objetivos generales de la sociedad, que percibe los retos principales y traza las modificaciones que reclama su superación (...) Por eso, el Estado propone su propia reforma.”

en los amarres institucionales al margen de la sociedad. Sin lugar a dudas el discurso era un vuelco notable para traspasar las fronteras del autoritarismo con una ideología liberal-burguesa potable y aceptable, bajo los contextos de circunstancias parecidas o semejantes de bloqueo político. México llegaba a un colapsamiento singular: culminaba con cierto “éxito” sus reformas económicas neoliberales, faltando una reforma política que cicatrizara la fractura en los cuadros dirigentes *vs.* los ascensos de las “clases peligrosas” y masas conservadoras y neopopulistas en no muy claros parámetros de sujeción y control institucionales.

El relevo surgió como opción, pero no necesariamente como alteración de las claras estructuraciones neoliberales, como ya antes indicamos. Esta orientación se constituyó, de hecho, en el eje central de la ampliación del componente burgués-tecnocrático de los 90 en el país. Por obvias razones una parte de la sociedad optó por apoyarla al resaltar su deslinde de las formas autoritaristas tradicionales respaldadas por determinados núcleos de la burocracia estatal. Pero si bien esto se proyectaba como una opción que dividía el campo de la clase política en dos facciones que perseguían continuar una y ascender otra al control del aparato público, lo significativo era que un segmento de la clase política —a pesar de su clara orientación neoliberal— levantaba las banderas de la democratización parcial y de las reformas burguesas fundada en un soporte de masas segmentado; pero también la misma defensa del corporativismo de viejo cuño retenía apoyos sociales significativos en virtud de su capacidad prebendataria y patrimonialista con que aún fungía desde importantes espacios de las arenas estatales. De tal suerte que, en las propias zonas de un Estado en crisis, dos proyectos con dos actores de las clases gobernantes y con respaldos sociales divididos se entrecruzaban en la coyuntura de los años 90. Esto permitiría comprender que el desplazamiento en los énfasis de liberalización política se desplegarían en los tres escenarios de la experiencia liberal (véase cuadro 2) como el rango de sensibilización más importante para atacar el estatismo, renegociar su papel en el cambio neoliberal o preservar una cuota imprescindible del mismo a fin de propiciar una transformación política restringida o sectorial.

Al margen de estos equilibrios y reajustes en la dinámica política neoliberal, lo irrefutable era la consolidación de esta división intraburguesa en la clase gobernante, garantizando que la fractura interburocrática se expandiera a lo social, con lo que se experimentó una

sensación de agravamiento intenso ante las desarticulaciones previamente constituidas entre el aparato estatal, las políticas de desarrollo social y las mediaciones corporativistas y tecnocráticas por un lado, así como los desgajamientos neocardenistas opositores al régimen y enfrentados contra ambas fracciones de la clase política. La sensación de ruptura institucional rodeó el conjunto de las discusiones y apreciaciones sociopolíticas de la época. Pero un matiz, en este momento se requirió que las divisiones de la clase política permitieran que la T siguiera bajo control de esa misma clase política. Máxime porque no emergió un actor capaz de canalizar, con independencia de aquéllas, la ruta del resquebrajamiento efectivo de las agendas políticas a partir de una propuesta distinta con capacidad de apoyos de masas. A esto contribuyó el que, cada vez más, en lo que se refiere a la conducción y orientación neoliberal de lo económico, las fuerzas económicas burguesas se impusieron sobre el Estado, dejando márgenes de negociación realmente secundarios, en el calor de las crisis económicas de 1994-95 y del FOBAPROA a finales del sexenio, al resto de los actores políticos.

La imposición burguesa sobre el Estado recanalizó las opciones de conflicto entre ambas fracciones de la clase política priista. Redefinió lo sustancial: el orden del sistema político y no la de tal o cual fracción de la élite gobernante era lo que se debatía entre aquéllas. Su división apareció así como algo secundario en el escenario de los relevos y apoyos del partido de Estado. Así, esta “flexibilización” permitió que la política económica arremetiera desmedidamente contra los sectores subalternos en materia de política laboral, salarial e inflacionaria. La razón era sencilla: la unidad en torno a la política económica arrastró a los desacuerdos políticos (intra y entre partidos: PRI y PAN) y los subordinó a su ritmo y lógica de reproducción burguesa. No habría divisiones de carácter social en esta oportunidad, y ni siquiera severos desgajamientos de los núcleos más progresistas en ambas columnas políticas. Es más, el hecho en cuestión posibilitó todo lo contrario: un desplazamiento de sectores sociales populares y de izquierda y de cuadros socialdemócratas, que giraron hacia el PAN en lugar de hacerlo hacia el PRD. La coyuntura había quedado, plenamente, inserta en un desdibujamiento ideológico-político reducido a la “alternancia” y no, necesariamente, a una transición de las formas burguesas de conducción. Su resultado, que impuso una fragmentación y conservación de la representatividad priista, sí desdibujó

el escenario de las interacciones, pensadas para cada una de las capas de la clase política panista y priísta, como veremos más adelante.

Naturalmente, este logro, consistente en paralizar consecuencias inesperadas de ingobernabilidad –restringiendo a su mínima expresión los costos sociales de la privatización y reformas neoliberales que no alcanzaron a reconducir la crisis de empobrecimiento y rupturas sociales– en el seno de las propias fracciones tecnocráticas (salinistas y zedillistas) no lograron impedir que la coagulada exasperación social se instalara en el país.

Cual maldición incomprensible, la tecnocracia se apoderaba de mecanismos de decisión públicos y privados con base en el empleo de lógicas burocráticas, autoritarias y corporativistas que anteriormente había objetado y censurado. Era obvio que esto provocaría una fractura inesperada y quedó en entredicho su capacidad de gestión respecto de las burocracias tradicionales, a las que responsabilizó de la debacle de los 70 e inicios de los 80, pero esto no producía, al calor de la coyuntura electoral, un recuerdo social crítico.

Las reformas neoliberales necesitaban de una enorme aplicación de poder y violencia del Estado contra la sociedad; de un intervencionismo descomunal en la economía, a cargo de los que sostenían la defensa de una mínima regulación en los procesos económicos y de la corporativización de la clase burguesa con la tecnocracia, como en los mejores instantes del populismo de antaño. La impostura de enfrentar al estatismo les devolvía la paradoja de ser los más pro-estadistas, a fin de socavar a la sociedad y sus demandas desde el anfiteatro de la defensa permanente de esa contradicción en los “hechos” neoliberales: la “defensa del Estado de derecho”.

Frente a esta situación, se abrían contradicciones flagrantes no reductibles a las capas de la clase política neoliberal. Muy por el contrario las sorpresas incluían a todo tipo de desempeños: ¡Actores (tecnocráticos y burgueses) que lideraban una “revuelta contra el Estado” basándose en el Estado mismo! ¡Partidos dispuestos a la liberalización política y la transición a la democracia que no asumían las contradicciones de incentivar la política individual en contextos de demandas corporativas! ¡Liderazgos de masas convocados desde promesas de satisfacción sectorial e individuales! ¡Conducciones neopopulistas con plataformas estadistas y neoliberales, alternativamente!

Pero también, y es quizá lo más significativo, con esto se generó un relajamiento institucional del Estado desde lo económico a lo políti-

co.⁵ La consecuencia de ello fue una masiva fracturación en los modos tradicionales de reproducción asociados a la acción del Estado,⁶ conduciendo al relajamiento de la disciplina entre grupos sociales subalternos y la autoridad y poder estatales. En su lugar —y ante los espacios ganados por el mercado, la privatización y el acotamiento del Estado en materia social— la exasperación social subalterna se dejó sentir. La tasa de violencia criminal y delictiva fue el más rápido desenlace que se comenzó a apreciar en los 90 como consecuencia de la ruptura y reestructuración social.⁷

Si se adiciona a esto los efectos que ocasionó el ajuste estructural en la restricción sobre las políticas sociales de créditos, subsidios, precios, consumo e infraestructura, más el incremento del narcotráfico, resulta más que evidente la conformación de una disolución social entre amplias franjas de la población, produciéndose, como parte del proceso, una desmaterialización del tejido social, económico y político en la sociedad por el advenimiento de la liberalización económica. Así, el desencadenamiento de esta dinámica permitió, en el caso mexicano, la constitución de un fondo social insatisfecho pero sin opciones; un masivo sector de ciudadanos desubicados pero sin posibilidades para contener esta ola de privatización generalizada y, finalmente, un ascenso de percepciones

⁵ Este aspecto de la “transición intraburguesa” no ha sido aún trabajado teóricamente. No cabe la menor duda que este emplazamiento del “mercado” sobre la “política”, en una tradición con tan marcado estatismo como el caso nacional, sólo podía hacerse con un giro espectacular: la integración a la economía de los Estados Unidos, explotando las ventajas que suponía la modernización económica asociada a ésta. Y desde allí, la lógica de los poderes dominantes podía desplazar las antiguas tradiciones por otras, afirmadas en claros y visibles respaldos burgueses y de clase media en el interior, sin que se produjera, en principio, una desarticulación con el exterior y sí, por el contrario, un franco respaldo mundial.

⁶ Es obvio que esta división de la clase gobernante y sus repercusiones equivalentes en el seno de la clase dominante pasaron por ritmos muy contradictorios en su evolución y desenvolvimiento. Lo que comenzó como una clara confrontación con la nacionalización bancaria en 1982 se transformó en una colaboración forzosa a través de los pactos económicos entre Estado-burocracia sindical y empresarios, en los que la capa tecnocrática ejerció el papel dirigente en la organización de los mismos, con lo cual la fracción burocrática-corporativa iba en descenso en sus capacidades de obstrucción a la liberalización económica. Así, la tecnocracia reforzaba, con cada pacto económico, la crisis de la fracción corporativista y se posicionaba como la interlocutora por excelencia ante las fracciones del gran capital burgués.

⁷ La Ciudad de México experimentó severas expansiones en los ritmos de la delincuencia a partir de los regímenes neoliberales, que arrancan desde 1983. Así, su tasa global de delitos entre 1977 y 1982 fue de -0.73% y, a partir de 1983-1988, se expandió a 3.20%; 0.88% para 1989-1994 y 8.12% en 1995-1997 (Fernández, 1999). Se observó que cuando se asoció la delincuencia con los incrementos de la canasta básica y la reducción salarial, se incrementaron mucho más sus expansiones en los distintos tipos de actividad delictiva de forma directa.

particularistas sobre el qué hacer para “resolver” su situación, al resquebrajarse los mecanismos corporativos habituales de interacción entre los distintos actores sociales.

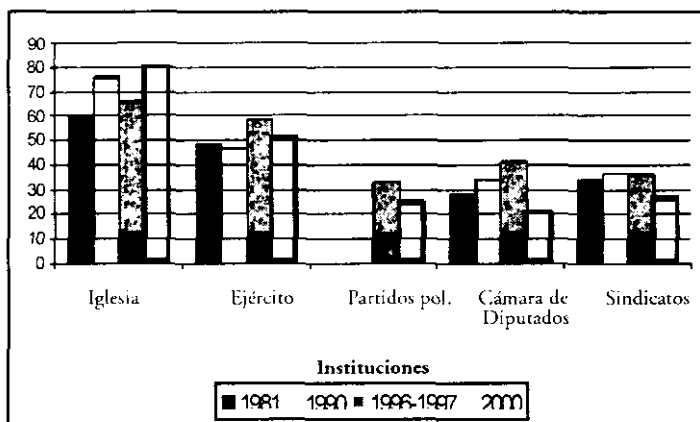
Sin lugar a dudas este giro, consecuencia de la ruptura entre Estado-sociedad, burocracias y tecnocracias, capas burguesas y clases gobernantes tradicionales, se “adelantaba” a los cambios de la T político-electoral del 2000. Éstos aceleraban en lo económico los amarres de lo tecnocrático y lo burgués, a fin de constreñir y minimizar los avances de la liberalización política de entre 1988 y 1997 por el lado político. De esta manera, el empobrecimiento con liberalización política se transformaba en una paradoja controlada. Se incrementaban valores individualizantes en medio de una intensa depauperización social.⁸ Se puede apreciar lo anterior en la pérdida de confianza en las instituciones y la ganancia en aquéllas que proporcionan “seguridad personal”, como sería el caso de la Iglesia (véase gráfica 1)

Y aquí la exasperación social y los ámbitos de decisión excluyentes se entrecruzaron coyunturalmente. La liberalización política desencadenó la disolución y matización intensa de mecanismos tradicionales de integración de actores, pero a la vez, aprovechó la cohesión pendiente en favor de un cambio pautado bajo las reglas autoritarias de la cultura política mexicana.

Se puede entender que esta situación —de exasperación— se haya suscitado como respuesta a la división entre las élites, a sus estrategias de contrarréplica al ascenso de masas y a la propia incapacidad de obtener un respaldo capaz de estabilizar al Estado. Recordemos, como apunta Navarro (1995), que el “ajuste es un proceso que desactiva las decisiones colectivamente vinculantes” al remitirlas al “mercado”. Con ello se suscita una despoltización, o más bien, una politización “atada” a los desenvolvimientos de las políticas de privatización. Y para el caso, el cambio político mexicano ha pasado por una “celebración privada” donde

⁸ Como balance de los últimos dos sexenios uno encuentra estimaciones globales coincidentes sobre el descalabro social en los regímenes neoliberales: “El Poder Adquisitivo, equivalente a 25% de Hace 20 Años”, *Excélsior*, 27 de marzo de 1997; “Desplome de hasta 25% en salarios”, *El Financiero*, 1 de junio de 1997; “Con el TLC se profundizó la dependencia alimentaria”, *La Jornada*, 14 de julio de 1997; “Aumenta el número de pobres y se reducen los subsidios”, *El Financiero*, 27-junio-2000; Julio Boltvinik, “Fábrica de pobres”, *Ibid.* 14 de julio de 2000; “Acentuado retroceso de las remuneraciones en el PIB; pasaron de 22.2 a 18.7 por ciento en el sexenio”, *Ibid.* 17 de julio de 2000; “Disminuyen ingresos y prestaciones laborales...”, *Ibid.* 24 de julio de 2000.

Gráfica 1. Grado de confianza en las organizaciones



Fuente: Encuesta Mundial de Valores.

el “ajuste estructural” resultó anterior a la transición a la democracia, por lo cual, la legitimidad del primero ha sido proyectada como determinante para la salud del segundo.⁹

Los actores resintieron así la imposibilidad de redefinir el espacio económico para apuntalar, en orientaciones más democráticas, el alcance del cambio político. Y precisamente, la conciencia de esta condición ha producido, pensamos, esta sensación de una estabilidad precaria; contradicciones crecientes y extensas como consecuencia de cambios incompletos, fragmentados y segmentados en las estructuras diferenciales del sistema político.

Ello permite apreciar que el presidencialismo tenderá a adoptar formas inestables de “radicalización”, que se incrementan o reducen, en atención a la intensificación en las arenas neoliberales de un parlamentarismo que muestre una volatilidad progresiva y de difícil cooptación tradicional. Es precisamente en esa interacción, entre la lucha de poderes del Estado, que la “sociedad civil” forjará compromisos e identidades imprecisas ante el Congreso y la presidencia; y ello se anuncia como un

⁹ Aquí habría que dar continuidad al estudio de los valores entre dos proyectos de modernización enfrentados en los últimos 20 años: el corporativismo populista vs. el neoliberalismo. En medio los grupos subalternos verán fragmentarse sus antiguas lealtades, lo que los descolocará hacia los nuevos cursos de acción en su autoidentificación política. Con ello se acrecienta una progresiva condición individualista resultado de un eje de valoración sistémico cada vez más extenso que recusa, entre otras cosas, la sociabilidad y respalda discursos instrumentalistas, inmediatistas y de costo-beneficio dominantes en la vida social mexicana.

comportamiento altamente probable a partir de las condiciones que anuncian la coyuntura electoral del 2000 (véase cuadro 3).

Cuadro 3. Dinámica de mediano plazo en el sistema político en la coyuntura del 2000

Ritmo de cambio político	Presidencialismo				Congreso				Sociedad Civil			
	R	P	C	V	R	P	C	V	R	P	C	V
Incremento	X		X	X	XX			X	X		X	X
Decremento	X					X	X		X			

R: Radicalismo P: Pactos C: Consensos V: Vacíos de poder.

Lo que se aprecia es que el éxito de la privatización en los valores y estrategias del poder, instauradas en el ámbito del sistema político, no han producido un orden con capacidad de forjar integración, más allá de las fuentes de legitimidad formal o procedimental en que se encuentran vinculados los procesos electorales con que el PAN y Fox emergen como ganadores en las elecciones de julio pasado. Lo que parece inminente que habrá de ocurrir es lo que Hirschman (1995) denomina *mudling through*, es decir, el proceso que hace cuasi-permanente el “pasar” de un conflicto a otro atravesándolos sin que ello suponga su resolución. Su base en las sociedades periféricas no es la institucionalización de la política y sí, por el contrario, la fragilidad con que los acuerdos o desacuerdos se estructuran socialmente hablando.

Y aquí reside la base de esta contradicción permanente: un fundamento legítimo del orden con una política que lo deslegitima sistemáticamente en atención a los sesgos conservadores de su definición a mediano plazo. Y porque la democracia así concebida “transforma la lucha por los derechos democráticos en luchas por la competitividad y eficiencia de las instituciones de la democracia” (Medellín Torres, 1994), generando, en ese sentido, un “vaciamiento de la transición” y sus contenidos reductibles a mera convocatoria al espacio de las representaciones y participaciones políticas en las interacciones legales acordadas. Esto, como premisa inicial del cambio político mexicano, está sujeto obviamente a una tensión permanente. Y como se visualiza en el cuadro 4, será el activismo desde

el Congreso lo que desencadenará o colocará en entredicho un proceso político progresivamente burocratizado y empantanado, por un lado, o activado por las contradicciones que lo atraviesan como ya señalamos, por otra parte.

Cuadro 4. Dinámica de mediano plazo en el sistema político según factores principales de la interacción política

Ritmo de cambio político	Presidencialismo				Congreso				Sociedad Civil			
	R	P	C	V	R	P	C	V	R	P	C	V
Incremento	6,7	1,6,2	1,2,3	3	1,3,7	4,9,11	2,1,5,9,11	1,2,3,7,8,11	6,2,7	6,11	6,9,11	7
Decremento	2	3			2,5	1,2	1	2,5				

R Radicalismo **P**: Pactos **C**: Consensos **V**: Vacíos de poder

Factores de interacción política

1: PRI 2: PAN 3: PRD 4: Burocracia 5: Tecnocracia 6: Clase dominante
 7: Sectores subalternos 8: Sistema Político 9: Fortalecimiento democratización
 10: Crisis social generalizada 11: Presidente

La transición política en México: un balance provisional

Así, aunque resulte evidente el entramado un tanto paralizante con que el proceso de transformaciones políticas arranca en México a partir de esta situación de bloqueos de lo político por lo económico, la necesidad de proyectar un marco de arreglos o fracturas parece imprescindible. Por eso intentamos aquí postular sintéticamente sobre ese probable escenario las líneas de conducción en que tendería a desenvolverse el sistema político.

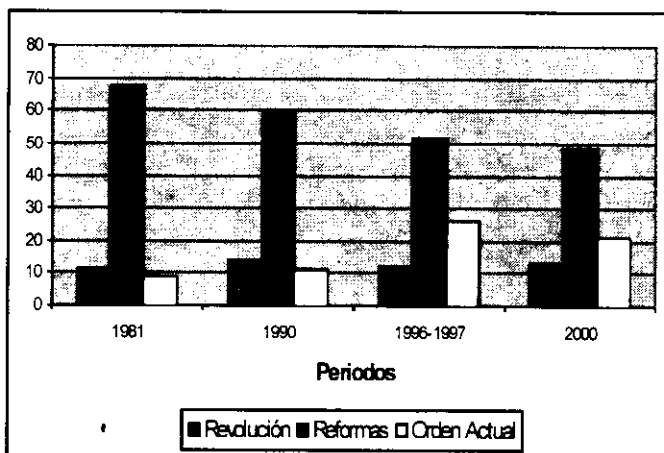
- En primer lugar, en toda transición (T) de una forma autoritaria a lógicas de liberalización políticas acotadas, el presidencialismo (P) decrece y el parlamentarismo (Parl) se incrementa.
- En las T que no incluyen pactos o consensos, los actores se ven arrastrados a sufragar acuerdos continuos y acotados, que pretenden preservar la estabilidad en un régimen con bajo nivel de institucionalización social.
- Por esto mismo, se habrán de producir lógicas alianzas bipartidistas de derecha como consecuencia de una profundización de demandas de masas que amenazarán con quebrantar los principios de la acumulación en la transición, intensificando los procesos de ingobernabilidad en el régimen.

- d) Es posible la presencia de resquebrajamiento intensos debido a la concepción pragmática de la política y de la acción con que los actores se proyectan: trivializando los problemas, simplificando su resolución en niveles de gestión o capacidades administrativas que “ignoran” las líneas de intereses de clase que atraviesan la sociedad, y los bloqueos que la balcanización del Estado muestra en la actual situación coyuntural.
- e) Por lo mismo se ignora al propio régimen como una de las fuentes estructurales de ingobernabilidad del sistema, vía la representación desigual de intereses que se instalan en su estructura de toma de decisiones y de cristalización institucional en lo fundamental.
- f) Al estimular el ascenso empresarial y religioso, así como de grupos conservadores como contrapeso –vía medios de comunicación y organizaciones sectoriales– ante las políticas de apertura política o de gasto social para afrontar desigualdad y extensión de derechos ciudadanos en la actual conformación de escenarios, se restringe la noción de libertades públicas y se realza la de los derechos de los individuos en lo esencial, acelerando la exasperación social.
- g) Desde esa perspectiva, la τ se concibe como gradualista y eficientista, dentro de una conducción marcada por concepciones tecnocráticas que buscan equilibrios sociales vía políticas que aceleran la no integración ciudadana, intensificando contradicciones y vacíos de apoyo sociales.
- h) La nueva clase política panista ignora la contradicción entre globalización neoliberal y liberalización política interna, así como la fragilidad en las conexiones de México con el entorno mundial, descuidando la elaboración de alternativas a la fragilidad de la dependencia financiera y de subordinación exportadora de la economía nacional.
- i) En ese sentido, se puede concebir a la actual τ como “minimalista”, por las concepciones que la condicionan; en términos de las demandas “economicistas” que la rodean, así como, finalmente, por las visiones instrumentalistas de sus liderazgos más determinantes.
- j) Frente a la polarización visible, a presentarse en el espacio del Congreso, se producirán parálisis políticas enfrentadas bajo reduccionismos o sesgos jurídicos y acuerdos interelitistas que sugieran a estas “arenas institucionales” como las únicas que garantizan la representatividad de las “soluciones políticas” en general, sobreestimando a los aparatos de representación de los partidos antes que a la creación de nuevos canales de comunicación y decisión social.

k) La suposición de que la “super-élite” de la T –organizada bajo principios gerenciales– puede solucionar problemas políticos con criterios técnicos y dentro de una polarización estructural de tan vastas proporciones, sólo confirma la permanencia de premisas de “buena voluntad” tecnocráticas, mas no su superación real.

Tengamos presente que estos perfiles se insertan en una visión del cambio social que no deja de ser contradictoria entre los actores que la suscriben. Así, en los datos que reúne la Encuesta Mundial de Valores (2000), no deja de llamarnos la atención cómo ponderan los entrevistados el cambio social.

Gráfica 2. Percepciones sobre el cambio en la sociedad



Fuente: Encuesta Mundial de Valores, varios años.

Se aprecia que frente a la cuestión de aplicar reformas, la respuesta indica una reducción notable: en 1981 un 68% aceptó el cambio vía las reformas, y para el 2000 el promedio descendió hasta un 49% de apoyo. Por el contrario, la defensa del orden, ante amenazas subversivas, incrementa sus porcentajes de 9% a 21% para el mismo periodo. Queda la expectativa en favor de la revolución en los mismos parámetros entre 11% y 13%, respectivamente, para el ciclo en análisis (véase gráfica 2).

Con ello nos encontramos no sólo ni exclusivamente con la T más o menos coincidente entre élites y ciudadanía en todas sus expresiones de discontinuidad, permanencia o indefiniciones, sino que lo menos estudiado del proceso es que la propia sociedad atraviesa por su propia tran-

sición, modificando sus parámetros de referencia; desplazándose de una opción a otra no por maduración, exclusivamente, y sí por evaluación instrumental, pragmática u oportunos momentáneos. Es la propia crisis de las sociabilidades encontradas y disímiles en el horizonte de la interacción más vasta de lo social, donde convergen cambios de opiniones, actitudes y decisiones hacia la acción de forma creciente y contradictoria; producto de la crisis del régimen, el ascenso liberal y de las ideologías conservadoras.

Se comprende así que los resultados de la dinámica política por venir sugieran que la estabilidad del sistema proyecte severas tensiones en su lógica funcional. La más notoria es la que se proyecta en el cuadro 5, donde se muestra una posible y creciente incapacidad de la presidencia para desarrollar iniciativas de negociación con el Congreso. Estrategia en la que el PRI intentará invertir sus mejores esfuerzos, a fin de impedir la consolidación de un poder en el presidente que reduzca o subordine las zonas de acción de los partidos políticos y del aparato de estado congresional o de los gobernadores mismos.

No cabe duda de que esto podría estimular la "competencia política", sobre una disyuntiva política mayor no muy clara hacia los participantes: el debilitamiento de la presidencia no supone el fortalecimiento del Congreso y la democratización del sistema político. Uno y otro no van de la mano. Por el contrario, el PRI, bajo el supuesto de que encabece dicha estrategia, no estará en capacidad ni con voluntad política de asumir la democratización de las instituciones públicas ante el riesgo de acrecentar su propia polarización ante los grupos neoliberales, corporativistas y autoritarios que hoy lo definen en franca polarización interna. Y el PAN no desea, en el corto plazo, incentivar un resquebrajamiento que vulnere a un aliado estratégico más próximo que el resto de los participantes. Por lo tanto, la profundización de la democratización, en ambos, representa contradicciones y crisis intrapartidarias, con sus electorados y respecto de las élites que no desean desarrollar al inicio del gobierno.

Así, la "T" se proyecta en un contexto de enormes contradicciones, donde los perfiles del cambio se concentran en el Congreso y la presidencia, dejando a la sociedad civil en un segundo plano de actuación frente a los actores institucionales. Por supuesto, esta condición sugiere un experimento de representación de intereses más allá de los de la antigua clase política y fracciones burguesas beneficiadas al amparo de los regímenes

Cuadro 5. Resultados de la dinámica política según las formas de reproducción sistémica

Naturaleza de las relaciones políticas

Formas de reproducción	Presidencia			Congreso			Sociedad civil		
	Heg	Dom	Sub	Heg	Dom	Sub	Heg	Dom	Sub
Estabilidad	X ←→ X			X			X		
Contradicción	X			X			X		
Cambio			X	X			X		
Crisis		X		X			X		
Incertidumbre	X			X			X		

Heg: Hegemónica; **Dom:** Dominante; **Sub:** Subalterna

de la pos-revolución; pero alternativamente supone, además, un cambio en las reglas del juego político, que intentan instaurar el cambio por encima de la ratificación exclusiva de los intereses del gran capital, por lo menos en lo que se refiere a políticas gradualistas o reformistas. La dificultad en lograrlo parece justificarse por la imposibilidad estructural –en el contexto de mediano plazo– de abatir la acumulación capitalista y privilegiar las demandas de sectores subalternos. Sin embargo, la tregua de la sociedad al nuevo gobierno sólo ratificará hasta que los límites al cambio y su potencial consolidación habrán de materializarse ante fuerzas que representan muy entrecortadamente intereses parciales de la sociedad nacional.

Por lo tanto, el peor de los escenarios a que conduce la actual transformación es, sin duda alguna, la presencia de vacíos de poder ante la incapacidad de armar pactos, consensos e iniciativas sociales progresistas con la sociedad y no sólo con las élites, de forma hegemónica. Reconocemos que la posibilidad de instaurar la alternancia no es suficiente para evitar estos vacíos, que sólo orientando el cambio político en dirección a una transición que supere la estructura del pacto implícito del “bipartidismo neoliberal” es que la presidencia abandonará su cautela –de “fiel de la balanza” (burguesa)– en la toma de decisiones y el Congreso, por otra parte, su protagonismo inevitable y profundamente inestable con que laborara en esta etapa de acomodados institucionales. Ello debilitará el “temor a parecerse o ser como...”, que estará rondando el esquema que organiza una distribución de tareas y supervisiones sin mucha justificación,

como hemos visto después del 2 de julio. Se nominan estructuras “individuales” de “poder” adscritas tal cual a comisionados, zares, supervisores y asesores extraordinarios, sin precisar qué modelo de democratización y transformación social se desea a partir de estas iniciativas, proyectando una relación de “verticalismos técnicos al presidente”, bajo la suposición retórica de que lo anterior respaldaría una mejor gestión pública, que no es equivalente a ampliar la democracia de base.

Es aquí donde el exceso por partir desde un ejercicio legítimo de la conducción política podría derivar en la inacción o en un populismo de derecha más efectista que eficiente, más simbólico que real, más orientado a recusar la “ineficacia del Estado” desde las mismas arenas estatales y reincidir, en parte, con la historia de los 80, construyendo un adversario sin cabeza que mantiene a los intereses sin ser objetados, pero que permite distraer y brindar mucho “circo ideológico” sin pan, ingresos o empleos.

Lo anterior, indudablemente, es el costo parcial del cambio y de las posibles orientaciones hacia una transición que apenas arranca. Donde la superación de las formas aberrantes de la política autoritaria formarán parte de un pasado y agendas difíciles, casi imposible, de ser reeditadas en México. Recordemos por ello que si el ideal de transformar el país se subsume en la idea de Schumpeter (1975) de que: “(los) votantes deben respetar la división del trabajo entre ellos y los políticos a quienes han elegido (y) comprender que, una vez que han elegido a alguien, la acción política ya no es cosa de ellos sino de este último”, vamos a tener problemas por visiones que ya introducen componentes de inestabilidad y crisis en la transición y en el sistema político, pero como dice el proverbio: habrá que esperar, antes de desesperar.

Bibliografía

- Boltvinik, Julio. “Crece el Hambre en México”, en: *La Jornada*, 23 de agosto de 1996, p. 22.
- Calva, José Luis. “Balance general del modelo neoliberal”, en: *El Financiero*, 3 de junio de 1994, p. 24.
- CEPAL. *La Brecha de la Equidad*, Santiago de Chile, CEPAL, 1997.
- “Encuesta Mundial de Valores”, en: *Reforma*, 9-13 de mayo de 2000.

- Fernández Reyes, Otto. "Transformación y crisis de identidad en la ZMCM" (mimeo), 1999.
- Habermas, Jürgen. *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1975.
- Hirschman, Albert. "Conflitos Sociais como Pilares Da Sociedade de Mercado Democrática", en: *Novos Estudos*, núm. 42, Rio de Janeiro, julio de 1995.
- Huntington, Samuel. *El orden político en las sociedades en cambio*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- Linz, Juan. "Las restricciones temporales de la democracia", en: A. Schedler y J. Santiso (comps.), *Tiempo y democracia*, Caracas, Nueva Sociedad, 1999.
- Medellín Torres, Pablo. "Democracia inacabada, transición o ficción democrática: los límites entre la reestructuración y el reformismo en América Latina. Nuevos itinerarios para un viejo problema", en: *Papers 44*, Universidad Autónoma de Barcelona, 1994.
- Navarro, Mario. "Democracia y Reformas Estructurales: Explicaciones de la Tolerancia Popular al Ajuste Económico", en: *Desarrollo Económico*, vol. 35, núm. 139, octubre-diciembre de 1995.
- O'Donnell, Guillermo y Philippe Schmitter. *Transiciones desde un Gobierno Autoritario: Conclusiones tentativas sobre democracias inciertas*, tomo IV, Buenos Aires, Paidós, 1988.
- Salinas, Carlos. *Reformando al Estado*, México, Presidencia de la República, Dirección General de Comunicación Social, 1990.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalism, Socialism and Democracy*, Nueva York, Harper, 1975.